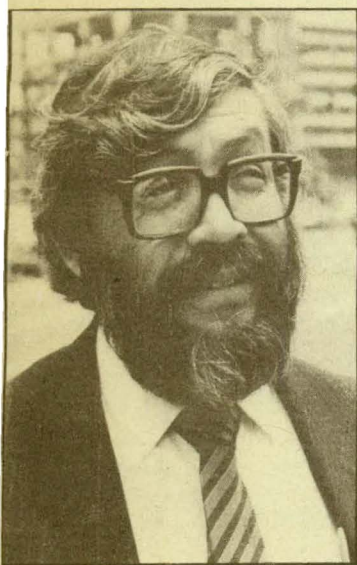


24-JUN-1987

Narcotráfico

POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA



A partir de ayer, 17 de junio, está reunida en Viena una magna conferencia mundial sobre el narcotráfico y la farmacodependencia convocada por el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas. El llamamiento mismo y la amplia respuesta que recibió, muestran la creciente importancia política que esos dos problemas, estrechamente vinculados, están teniendo en todo el mundo y, naturalmente, en nuestro país.

En representación de México asiste el procurador general de la República, doctor Sergio García Ramírez. En la víspera de su partida a Europa, García Ramírez se reunió con diputados miembros de diversas comisiones, ante los cuales reiteró una tesis

que ha venido abriéndose paso en el abordamiento del tráfico de drogas y consumo. Esa tesis consiste en reconocer que tal cuestión no tiene ya, si es que alguna vez lo tuvo, un perfil meramente policiaco, y de salud pública en el caso de la farmacodependencia, sino que tiene claramente sustancia económica y política.

No fue casual, por eso, que junto con García Ramírez se entrevistara con los diputados, el 10 de junio, el Secretario de la Reforma Agraria. Como se sabe con mayor claridad cada vez, México es un país productor de materias primas para drogas refinadas, y de marihuana, que se consume sin apenas procesos. Aunque también tiene importancia como nación de paso, entre países productores sudamericanos, y el gran mercado consumidor que son los Estados Unidos, la producción en nuestro propio suelo de marihuana y amapola reviste una mayor importancia para nuestra sociedad.

Crecientes superficies agrícolas se destinan en México al cultivo de estupefacientes. Si sólo se persiguiera judicialmente a los campesinos dedicados a esos menesteres, la justicia que de ese modo tratara de aplicarse se convertiría simultáneamente en una forma de injusticia. Porque los agricultores que consagran sus parcelas a las drogas casi nunca son, en el sentido técnico de la palabra, delincuentes, o al menos estarían afectados por varias clases de atenuantes. Aun con una muy escasa conciencia sobre la peligrosidad de sembrar y cosechar marihuana y amapola, la mayor parte de los campesinos mexicanos que a ello se dedican enfrentan el riesgo porque no les queda más remedio. Antes de convertirse en infractores de la ley, son víctimas de una estructura social y económica, de una situación agraria y de una crisis general que los prensa entre sus diversos grilletes.

Aquellos, casi privilegiados, que en el pasado reciente pudieron emplear en sus cultivos insumos y equipos, han ido perdiendo paulatinamente esa capacidad de operación. El solo costo del combustible para operar implementos agrícolas hace prohibitivo su uso. Y si a eso se agregan problemas de precios, de falta de crédito, de dificultad de transporte para el mercadeo, ¿por qué causas hemos de sorprendernos si esos campesinos ven como ayuda del cielo la llegada de los narcotraficantes que financian sus cultivos, les entregan anticipos y les ofrecen remuneraciones jamás soñadas?

Es posible, y por desgracia necesario, aplicar la ley a esos campesinos y meterlos a la cárcel por delitos contra la salud. Pero los que caen en manos de la policía son reemplazados por otros, pues la demanda es creciente, y el problema no cesa sino que extiende sus dimensiones y su profundidad. Se re-

quiere, entonces, combatir el cultivo de estupefacientes también con una estrategia económica, que haga tanto o más rentable que cosechar drogas, devolver las tierras a su vocación original, la producción de alimentos o materias primas agrícolas para usos industriales.

Para que una concepción de esta naturaleza pueda ponerse en práctica, se requiere una firme actitud política en las autoridades federales. Y surge entonces la gran cuestión, que consiste en el enfrentamiento del poder político de un Estado contra ese monstruo de mil cabezas que es el narcopoder, el poder de los mercaderes de las drogas. Hasta hace pocas décadas, los ciudadanos comunes y corrientes podrían soslayar el problema imaginando que el mundo de las drogas y su conexión con la política eran asuntos reservados a mafias clandestinas y perseguidas, o interesante materia prima para literatura policiaca o películas de truculenta acción. Hoy ya no podemos esconder la cabeza y negarnos a ver la realidad que nos circunda. En todas partes, ya sea en los países consumidores o en los que producen la droga, el narcopoder crece y avanza.

En algunos países sudamericanos llega a adquirir proporciones legendarias. Así, se dice que Roberto Suárez, el zar de la coca boliviana, ha ofrecido más de una vez a los inestables y empobrecidos gobiernos que sobreviven en La Paz, cubrir él solo el monto de la deuda externa, con tal de realizar su comercio con entera tranquilidad, turbada sobre todo en épocas recientes por la presencia de fuerzas norteamericanas. Señalamos aquí, de paso, y a ese propósito, una de las consecuencias nocivas del comercio de estupefacientes que es la pérdida o disminución de la soberanía de países débiles, incapaces por sí mismos de encarar un fenómeno que los avasalla.

En Colombia, el narcopoder ha asesinado decenas de periodistas y funcionarios encargados de combatirlos, incluido un ministro de Justicia. Sus fuerzas dominan comarcas enteras y, mediante la fuerza, la compra de voluntades o la intimidación, o todo ello reunido, reemplazan o controlan al gobierno formal. Y hasta patrocinan campañas electorales, con lo que resultan teniendo representantes más o menos explícitos en las Cámaras de Diputados y Senadores.

No estamos, en México, lejos de una situación semejante. País vecino al mayor mercado mundial, mercado en expansión a pesar de hipócritas campañas más publicitadas que eficaces, el nuestro tiene una especial vulnerabilidad ante el narcopoder. Es presumible, aunque sólo pueda susurrarse la información del caso, que altos jefes militares y funcionarios de alto rango estén involucrados en el mercado de drogas. Proclamar sus nombres en voz alta es sumamente riesgoso porque si las evidencias, escasas o tenues, son verdaderas, los denunciados pueden actuar violentamente y con impunidad sobre sus denunciantes. Si, por el contrario, se acusa en falso, el desprestigio de miembros relevantes de las fuerzas armadas del gobierno se convierte en una ayuda para los traficantes de narcóticos, a quienes hacen el juego los denunciantes que carecen de evidencias suficientes para formular acusaciones.

Aunque no puede negarse que el gobierno de México realiza una intensa campaña contra las drogas, manifiesta en frecuentes capturas de cultivos, cargas y traficantes, el hecho mismo de que el flujo no cese indica que no se han dado golpes de verdadero impacto contra el narcopoder. No son escasas las referencias que relacionan, por ejemplo, al exgobernador Toledo Corro con personajes vinculados a este infame comercio. Y sin embargo a ninguna autoridad se le ha ocurrido hacerlo parte de una investigación. Efectos como ese son algunas de las consecuencias del narcopoder, cuyo combate junto con la batalla a la farmacodependencia y al comercio de drogas, son una cuestión de Estado. Y hasta podría decirse que de supervivencia del Estado.